



Sr. Amilivia González, Presidente

Sr. Estella Hoyos, Consejero

Sr. Fernández Costales, Consejero

Sr. Madrid López, Consejero y

Ponente

Sr. Nalda García, Consejero

Sr. Sobrini Lacruz, Secretario

La Sección Segunda del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Zamora el día 14 de octubre de 2009, ha examinado el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxx, en nombre y representación de su hija ccccc*, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

## DICTAMEN

### I

#### ANTECEDENTES DE HECHO

El día 8 de septiembre de 2009 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxx, en nombre y representación de su hija ccccc, debido a los daños sufridos en un accidente escolar*.

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 16 de septiembre de 2009, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 960/2009, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal como dispone el artículo 53 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de Castilla y León, aprobado por el Decreto 102/2003, de 11 de septiembre. Turnado por el Sr. Presidente del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Madrid López.

**Primero.-** El 19 de febrero de 2008 D. xxxxx, en nombre y representación de su hija ccccc, de 6 años de edad, presenta una reclamación de responsabilidad patrimonial, debido a los daños sufridos por ésta en un accidente escolar el 1 de febrero, en el C.R.A "hhhhh", de xxxxx (xxxxx).



Expone en su escrito que “En un ejercicio de G. F. chocó con otro niño y cayó al suelo”. A consecuencia de ello presenta fisura en la clavícula por lo que precisó un vendaje en ocho.

Reclama como indemnización por los daños sufridos la cantidad de 18,50 euros, en concepto de vendaje en ocho.

Acompaña a su reclamación fotocopia compulsada del Libro de Familia para acreditar la representación que ostenta sobre la menor, copia del informe de Urgencias del Complejo Asistencial de xxxxx de 1 de febrero de 2008 y factura original de la ortopedia por importe de 18,50 euros, por un vendaje en ocho.

**Segundo.-** Consta en el expediente la comunicación del accidente escolar de 14 de febrero de 2008, en la que se indica que “los alumnos de primer ciclo de Primaria de xxxxx estaban en clase de Educación Física jugando a un juego, la alumna accidentada, ccccc, iba corriendo mirando hacia otro lado y se chocó con otro niño que también venía corriendo, como resultado del choque cayeron los dos niños al suelo y ccccc cayó hacia delante haciéndose daño en mano y hombro”.

**Tercero.-** El 29 de febrero de 2008 el Inspector de Educación informa de que “Realizadas (...) las comprobaciones relativas al accidente escolar (...) los hechos ocurridos y los daños sufridos por la alumna y comunicados por la directora del centro en la comunicación de accidente escolar objeto del presente informe, se corresponden con la realidad.

**Cuarto.-** El 6 de mayo de 2009, previo requerimiento de la instructora, la directora del Centro emite informe sobre el accidente sufrido por la alumna en los siguientes términos: “1. Que el día 1 de febrero de 2008, mientras se desarrollaba la clase de educación física, la alumna (...), sufrió un accidente al chocar con otro niño y se hizo una fisura en la clavícula.

»2. Que el choque se produjo de forma fortuita mientras se estaba realizando una actividad adecuada al nivel y edad del alumnado.

»3. Que la actividad que se realizaba estaba contemplada en la programación didáctica del curso”.



**Quinto.-** Por Orden del Consejero de Educación de 29 de mayo de 2009, se admite a trámite la reclamación presentada y se nombra instructora del procedimiento.

**Sexto.-** Mediante escrito de 3 de junio de 2009, notificado el día 12, se concede trámite de audiencia al padre de la menor. No consta que el interesado haya presentado escrito de alegaciones o documentación alguna.

**Séptimo.-** El 27 de julio de 2009 se formula propuesta de orden desestimatoria de la reclamación planteada.

**Octavo.-** El 5 de agosto de 2009 la Asesoría Jurídica de la Consejería de Educación informa favorablemente la referida propuesta de orden.

En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen.

## **II CONSIDERACIONES JURÍDICAS**

**1ª.-** El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente, con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.h), 1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Segunda emitir el dictamen según lo establecido en el punto 4º, regla B), apartado e), del Acuerdo de 30 de octubre de 2003, del Pleno del Consejo, por el que se determina el número, orden, composición y competencias de las Secciones.

**2ª.-** El procedimiento se ha instruido con arreglo a lo previsto en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollados por el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.



No obstante, cabe poner de manifiesto el excesivo tiempo transcurrido desde que se presenta la reclamación (19 de febrero de 2008) hasta que se formula la propuesta de orden (27 de julio de 2009). Esta circunstancia necesariamente ha de considerarse como una vulneración por parte de la Administración del artículo 12.b) del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que consagra el derecho de los ciudadanos a la resolución de los asuntos que les conciernan en un plazo razonable; e igualmente como una infracción de los principios y criterios que han de regir su actuación, recogidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, como los de eficacia, celeridad, eficiencia y servicio a los ciudadanos, entre otros.

**3ª.-** Concurren en la parte reclamante los requisitos de capacidad y legitimación exigidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La competencia para resolver la presente reclamación corresponde al Consejero de Educación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 142.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 82.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

El interesado ha ejercitado su derecho en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Los hechos tienen lugar el 1 de febrero de 2008 y la reclamación de responsabilidad patrimonial se presenta el 19 de febrero, por lo tanto no ha transcurrido el plazo de un año señalado por la ley.

**4ª.-** El artículo 106.2 de la Constitución establece que "Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

La referencia constitucional a la ley debe entenderse hecha a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a la que además se remite el artículo 82.1 de la Ley 3/2001, de 3 de julio.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, Sentencias de 1 de marzo, 21 de abril y 29 de octubre de 1998; 28 de enero, 1 y 25 de octubre de 1999), así como la doctrina del Consejo de Estado (Dictámenes de 27 de marzo de 2003, expte. nº 183/2003; 6 de febrero de



2003, expte. nº 3.583/2002; y 9 de enero de 2003, expte. nº 3.251/2002) y de este Consejo Consultivo (por todos, Dictámenes 1.008/2005, de 1 de diciembre; 1.134/2005, de 12 de enero de 2006; 59/2006, de 19 de enero; y 300/2006, de 23 de marzo), la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la ley.

c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del servicio o la actividad en cuyo ámbito se produce el daño.

d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.

**5ª.-** En cuanto al fondo de la cuestión planteada, tanto el Consejo de Estado como el Consejo Consultivo de Castilla y León han mantenido, reiteradamente, que el hecho de que la responsabilidad de la Administración sea objetiva, no implica que la misma deba responder necesariamente de todos los daños que puedan sufrir los alumnos en centros públicos. Para que proceda la responsabilidad patrimonial deberán concurrir los requisitos que la caracterizan, legalmente establecidos en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y que deben analizarse atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso.



En este mismo sentido, el Tribunal Supremo ha declarado en Sentencia de 5 de junio de 1998, que “la prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico”.

También conviene tomar en consideración lo establecido en la Sentencia de mismo Tribunal, de 13 de noviembre de 1997, en la que se mantiene que “aun cuando la responsabilidad de la Administración ha sido calificada por la jurisprudencia de esta Sala como un supuesto de responsabilidad objetiva, no lo es menos que ello no convierte a la Administración en un responsable de todos los resultados lesivos que puedan producirse por el simple uso de instalaciones públicas, sino que, como antes señalamos, es necesario que esos daños sean consecuencia directa e inmediata del funcionamiento normal o anormal de aquélla”.

Por lo tanto, la responsabilidad de la Administración procederá en aquellos casos en que los daños sean consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, y no basta a estos efectos que los daños aparezcan con motivo u ocasión de la prestación de dichos servicios públicos.

Antes de entrar a analizar el fondo del presente asunto, es preciso referirse a que los daños que se derivan del ejercicio de la educación física (actividades educativas que por sus particulares características pueden implicar un riesgo), no son siempre imputables al centro público docente por el hecho de desarrollarse durante las horas lectivas. La ocurrencia del daño con ocasión de las actividades de educación física debe conducir a un examen más cuidadoso de las circunstancias que pueden implicar causalidad, entre otras la adecuación de los ejercicios con la edad del alumno, con las instalaciones en que se desarrolla, con la naturaleza de los aparatos empleados en su ejecución y el grado de dificultad que implican.



En el caso que se examina el daño aducido no guarda relación con el funcionamiento del servicio público educativo -a pesar de haber tenido lugar durante la clase de educación física- por no ser consecuencia directa e inmediata de ella sino que se debió a una causa fortuita como fue el que la alumna chocara accidentalmente con uno de sus compañeros. Así se indica en el parte de comunicación del daño, que describe qué actividad estaban realizando en ese momento; de él se deduce que en ningún momento fue peligrosa ni inadecuada para alumnos de esa edad.

Por lo tanto, las lesiones no fueron consecuencia de un ejercicio peligroso, arriesgado o inapropiado para los alumnos y tampoco se debieron a un defectuoso estado de las instalaciones. El accidente ocurrió de una forma imprevisible e inevitable. La caída se produjo en el centro educativo y durante el transcurso de las clases pero no como consecuencia del funcionamiento de la Administración Educativa.

Por ello se considera que no existe nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño producido, ya que la caída trae causa directa e inmediata del tropiezo fortuito con ocasión de un ejercicio en la clase de Educación Física.

En el presente suceso concurre lo que se ha venido denominando por la doctrina y la jurisprudencia el *riesgo general de la vida*. Este criterio negativo de imputación objetiva a la Administración de un cierto resultado dañoso, aunque no está expresamente establecido por la ley, se infiere de nuestro global sistema de responsabilidad extracontractual. En este sentido procede citar las Sentencias del Tribunal Supremo de fecha 2 de enero, 28 de marzo y 2 de junio de 2000, entre otras.

De acuerdo con este criterio, se trata de negar responsabilidad por aquellos hechos dañosos que el perjudicado tiene el deber natural y social de asumir como una incidencia normal y esperable en el natural acontecer de su existencia; de una eventualidad en la que, por las circunstancias en que se produjo, no se aprecia la existencia de un título de imputación adecuado y suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración Autónoma.



En definitiva, este Consejo Consultivo comparte la propuesta desestimatoria, ya que los hechos ocurridos constituyen riesgos propios e inherentes al desarrollo de la actividad escolar.

### **III CONCLUSIONES**

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León informa:

Procede dictar resolución desestimatoria en el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxx, en nombre y representación de su hija ccccc, debido a los daños sufridos en un accidente escolar.

No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado.